

APELO.

OFICINA DE GESTION ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 2.

SR. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA PRIMERA NOM.

**JUICIO: SOSA JULIO BENJAMIN C/ DE FILIPO OSCAR HUGO Y OTRO S/
DAÑOS Y PERJUICIOS. EXPTE. 1892/13.**

Ignacio José Silvetti, abogado, MP 5733. Libro L, Folio 229, en mi carácter de apoderado de la citada en garantía **AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA**, con domicilio digital constituido en casillero 20284766521 a V.S. digo:

I.- OBJETO.

Que, no encontrándome conforme con la sentencia de fecha 25/06/2024 y de su aclaratoria de fecha 30/07/2024, vengo a apelarlas en todos sus términos y a solicitar sean revocadas y en su lugar se disponga rechazar la demanda en contra de mi mandante.

II.- FUNDO RECURSO.

1) Primer agravio.

La sentencia nos agravia en cuanto a la interpretación y valoración de las pruebas y de la carga de la prueba a producir respecto del pago de la prima de seguro invocada en nuestro escrito de contestación de demanda y a las normas específicas contenidas en la ley de seguros y en la restante normativa de fondo.

En efecto, la sentencia fundamenta el rechazo de la declinatoria en que esta parte no acreditó la falta de pago, estando obligada a hacerlo.

Esta conclusión es errónea. Agrosalta Coop. de Seguros Ltda. fue traída a este proceso en virtud de la supuesta existencia de contrato de seguro vigente y exigible. Esta legitimación pasiva debía ser probada por quién la invocara, por es el fundamento del derecho que invoca (art. 302 CPCC ley 6176 y art. 322 CPCC).

El criterio asumido en la sentencia se contradice con lo dispuesto en los arts. 726 y 727 CCCN que establecen que no hay obligación sin causa, que la existencia

de la obligación no se presume y que la interpretación sobre existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Si no se acreditó la causa de la obligación invocada en contra de Agrosalta (contrato de seguro exigible) no puede haber condena.

Y la sentencia también contradice a los arts. 109 y 118 LS que suponen que, para que la extensión de la condena a la aseguradora sea posible, se haya probado la existencia del contrato, su contenido y exigibilidad.

La prueba de la existencia del contrato es fundamental ya que la aseguradora sólo puede ser condena dentro de los límites del contrato (arts. 109 y 118 LS). Entre los límites del contrato está la obligatoriedad del asegurado de pagar la prima y, en caso de omisión, la caducidad de su derecho.

Por lo tanto, sea el actor o el Sr. De Filipo estaban obligados a acreditar que la obligación de Agrosalta era exigible.

Por otra parte, los contratos deben ser interpretados y ejecutados de buena fe y considerando la conducta seguida por las partes.

Remitida la carta documento de fecha 22/11/2012 rechazando el siniestro, el Sr. De Filipo no contestó ni desmintió las causas del rechazo. Lo mismo hizo en estos autos al correrse traslado de la declinación. Con lo cual, estando obligado a pronunciarse, su silencio debe interpretarse como conformidad (art. 263 Cód. Civ. y Com. y arts. 293, inc. 2 y 294, CPCC).

En cuanto a la prueba del pago, pesaba sobre Sr. De Filipo y sobre la parte actora acreditar su existencia porque así lo dispone expresamente el art. 894 inc. a del CCCN, el art. 31 LS y el art. 1031 CCCN (art. 1201 Cód. Civil vigente al momento del hecho).

Por nuestra parte, se nos quiere imponer la carga de probar hechos negativos consistentes en la inexistencia del supuesto pago. Como se trata de probar la inexistencia de un hecho, la prueba nunca podrá ser directa. Por ello, para resguardar el derecho de defensa de mi mandante y respetar la carga probatoria que pesaba sobre

quienes alegaban la existencia del pago, se debía colocar sobre estos últimos una exigencia mayor y comparar los medios de prueba producidos por unos y otros.

La jurisprudencia es indulgente con los que tiene que probar hechos negativos, comprendiendo, las dificultades inherentes a ésta situación. Ha construido para ellos, la doctrina de las llamadas «pruebas levoires» (LESSONA: Teoría de las pruebas, t. 1, p. 375. Couture Eduardo ob. citada, pág. 247) y sostenido que para el caso de prueba muy difícil («difficilioris probationis») los jueces deben atemperar el rigorismo del derecho a fin de que no se hagan ilusorios los intereses legítimos (Rev. C. E. D.), t. 1 (año 1927), p. 696; «L. J. U.», t. 20, n° 3039; t. 30, p. 257, en casos de prueba de servicios médicos. Idem cita anterior). Además, como las proposiciones negativas son, normalmente la inversión de una proposición afirmativa, no puede quedar librada a la incertidumbre de la fórmula, la suerte de la carga probatoria.

Por ello, la prueba indirecta de la falta de pago es la conducta asumida por el asegurado que no se ha opuesto.

El pago se prueba con el recibo emanado del acreedor. En nuestro caso el acreedor (Agrosalta) ha negado haber entregado el recibo, y el pretendido documento nunca fue exhibido. Lo único que se ha presentado como prueba de este pago es la afirmación del actor de que supuestamente el Sr. De Filippo le exhibió un recibo. Es decir que la única prueba del pago es la palabra del actor, lo cual es inconcebible.

En cuanto a la invocación de las normas de consumo como fundamento de una supuesta obligación de Agrosalta de notificar al Sr. De Filippo en forma previa al siniestro que se encontraba en mora, esta obligación no surge e la ley y se opone a las normas vigentes.

La aplicación de la ley 24.240 tampoco no establece esta obligación en cabeza de la aseguradora. Esta ley en su art. 3 dice que: *"Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo..."*

...Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica."

La mora es automática, no necesito de intimación ni notificación previa (art. 509 CC y 886 CCCN). Las consecuencias de la mora y de la falta de pago están establecidas en la ley y en el contrato.

Como la ignorancia del derecho no puede ser invocada como excusa para incumplimiento (art. 8 CCCN y art. 20 CC), el Sr. De Filipo conocía las consecuencias de la mora en el pago de la prima contenidas en el CC y en la ley de seguros.

Además, como el contrato de seguro contiene la transcripción de las normas de la ley de seguro y como tampoco se ha alegado el desconocimiento del contenido del contrato, el Sr. De Filipo conocía las consecuencias de la falta de pago de la prima.

Respecto de esta causa de la declinación, el art. 31 de la ley 17.418 dispone:

"Si el pago de la primera prima o de la prima única no se efectuara oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago"

Por su parte la cláusula 80 de las condiciones generales del contrato de seguro -Resolución 21600 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispone:

"De acuerdo con la resolución n° 21.600 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el comienzo de vigencia de la cobertura del riesgo del presente seguro, queda supeditado al pago total de premio al contado. Se entiende por premio, la prima más los impuestos tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional a la misma... Queda entendido y convenido que el presente contrato de seguro queda condicionado al pago total o parcial del premio, según el caso, y siempre dentro del marco convencional que aquí se describe"

Y continúa dicha cláusula en su art. 2°:

"Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que este se haya producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida... sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna, ni constitución en mora, la que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo"

Vemos entonces que las leyes de fondo y la ley especial (ley de seguros), a las cual remite el art. 3 de la ley 24.240, establecen que la mora en el pago de la prima trae aparejado la caducidad del derecho del asegurado, que la prueba del pago recae sobre quién la invoca y que la causa de la obligación que se reclama también está en cabeza de quién la invoca. A esto debemos sumar la carga probatoria impuesta por los arts. 302 CPCC ley 6176 y 322 CPCC y el los límites de la condena que se deben ajustar al contrato de seguro (art. 118 LS).

La doctrina citada en el fallo y elaborada por Waldo Sobrino es minoritaria porque, justamente, implica derogar por interpretación amplia todos los institutos jurídicos en post de favorecer al consumidor. Es tan amplia su teoría que ningún acto jurídico escapa a la ley de consumo.

Al ser doctrina minoritaria no puede ser la fuente de derogación de las leyes vigentes que deben aplicarse por imperito de la misma ley que el interpreta (art. 3).

Por ello, condenar a mi mandante con fundamento en esta doctrina, apartándose las normas vigentes que la exoneran de responsabilidad, es una violación al art. 18 CN que exige que toda condena sea fundada en ley, no en doctrina.

La ley de seguros y el Código Civil exoneran de responsabilidad a mi mandante porque no se probó que la obligación era exigible.

En cuanto al argumento de que estamos ante un caso de seguro obligatorio con una función social, tampoco es suficiente para eximir al asegurado del cumplimiento de sus obligaciones.

El art. 68 de la ley 24.449, que establece la obligatoriedad de la contratación del seguro, dice que ese contrato de estar de “acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora...”.

Como ya hemos citado, la SSN en la resolución 21600, la cláusula 80 art. 2 dice que: *"Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que este se haya producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida... sin necesidad*

de interpelación extrajudicial o judicial alguna, ni constitución en mora, la que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo..”.

Entonces, la obligatoriedad del seguro, no le quita al asegurado la obligación del pago de la prima en tiempo y forma bajo el riesgo de perder la cobertura en forma automática.

El mismo art. 68 de la ley 24.449 dice que el seguro debe cumplir con las condiciones impuestas por la SSN que a su vez dispone que la mora en el pago de la prima trae aparejada la suspensión automática de la cobertura.

El seguro obligatorio no es total, irrestricto, ilimitado e incondicionado. No hay derechos absolutos y sólo pueden ser ejercitados de acuerdo a las normas que regulan su ejercicio (así lo dice también el propio art. 68 ley 24.449), tampoco se ampara el abuso del derecho y se deben ejercer de buena fe.

La postura asumida respecto al seguro obligatorio implica un serio riesgo al sistema ya que quiebra el sinalagma del contrato y, de replicarse, haría colapsar todo el sistema. Imaginemos si el seguro es ilimitado el valor de las primas sería exorbitantes, nadie podría contratar seguros y la finalidad del contrato de seguro obligatorio se vería frustrada.

Esta postura también implica desplazar al principal sujeto obligado por la relación jurídica sustancial por un tercero traído en virtud de una relación contractual accesorio, lo cual tampoco es legalmente posible.

Por todo lo expuesto, solicito se haga lugar al recurso de apelación, se revoque la sentencia de primera instancia y se haga lugar a la declinación de cobertura con fundamento en la falta de pago de la prima.

2) Segundo agravio.

También nos agravia que la sentencia haya tenido por acreditada la mecánica del accidente narra en la demanda y, por aplicación del art. 1113 Cód. Civil,

se haga recaer la responsabilidad sobre los demandados y mi mandante. Además, la sentencia afirma que los demandados no hemos producido prueba alguna para acreditar la culpa de la víctima.

La interpretación y valoración de la prueba producida, así como la interpretación y aplicación de la responsabilidad objetiva atribuida a los demandados torna imposible cualquier intento de los demandados de eximirse de responsabilidad probando la culpabilidad de la supuesta víctima.

¿Cuánta culpa es necesaria demostrar para eximirse de la responsabilidad objetiva? En nuestro caso se ha acreditado una culpa grave del actor y aun así se ha determinado una responsabilidad objetiva del demandado de un 70%.

La sentencia invoca las pruebas producidas en la causa penal y que determinaron el archivo de las actuaciones con fundamento en las conclusiones de las pericias. Esta prueba ha sido ofrecida por el actor, por lo que ha aceptado sus resultados. Veamos cuales eran esas conclusiones periciales.

El informe médico firmado por el Dr. Alberto V. Pacheco acredita las consecuencias de la alcoholemia detectada al actor Julio Benjamín Sosa. Estas consisten en distorsión psicosensorial, con retardo de respuesta a los estímulos visuales y auditivos...exaltación del nivel de impulsividad y de agresividad.....los tiempos de reacción a los estímulos visuales y auditivos se alargan significativamente...Sosa Julio Benjamín no se encontraba en condiciones de óptimas de conducir un vehículo automotor (motocicleta u otro similar) ni de advertir las circunstancias del tránsito).

Esta alcoholemia detectada, en sí misma es una falta grave según la ley de tránsito (arts. 48 inc. a y 77 inc. m). Si es una falta grave, la culpa y la responsabilidad que involucra también son graves. Es tan grave la falta y el peligro que significa para el conductor y para terceros que autoriza a la retención del vehículo sin necesidad de orden judicial (art.72, inc. a 1).

Como veremos más adelante es falta y culpa grave (conducir alcoholizado) tuvieron incidencia directa en la producción del accidente y a la vez son causa de otras infracciones que también son causa del accidente.

En la segunda pericia mecánica presentada en sede penal confeccionada por el Lic. Juan José Cata, la cual considera las conclusiones del médico Pacheco respecto del estado psicofísico del Sr. Sosa, se concluye que:

1) el automóvil conducido por De Filipo circulaba a baja velocidad y que la motocicleta lo hacía a elevada velocidad (otra infracción a la norma de tránsito).

2) El automóvil realizaba la maniobra cuando la motocicleta no había ingresado a la encrucijada.

3) La falta de maniobras evasivas por parte del motociclista son consecuencia de su elevada intoxicación etílica.

4) La causa del accidente es la elevada intoxicación etílica del Sr. Sosa y la elevada velocidad de la motocicleta.

Ninguna de estas conclusiones fueron desvirtuadas por la pericia realizada en autos.

Esta pericia también hecha por tierra el argumento utilizado por la sentencia para aplicar la responsabilidad objetiva: supuesta violación de la prioridad de paso por parte del demandado.

Este argumento es falso porque la prioridad de paso se aplica cuando hay simultaneidad en llegar a una encrucijada. Si no la norma haría imposible el cruce de cualquier esquina, tomar desvíos, etc. entorpeciendo la fluidez y seguridad del tránsito que son otros de los pilares de la ley de tránsito.

La simultaneidad en el arribo a la encrucijada ha sido descartada por el perito que sostiene que el automóvil ya realizaba la maniobra cuando la motocicleta no había llegado a la encrucijada.

Esto significa que el Sr. De Filippo, llegó a la encrucijada, tenía paso y realizó la maniobra a baja velocidad. Mientras realizaba la maniobra apareció la motocicleta que, debido a la alta velocidad y a las condiciones de alcoholemia de su conductor no pudo reaccionar ante una circunstancia habitual del tránsito en una encrucijada.

Cada una de las conclusiones periciales citadas implican violaciones graves a las normas de tránsito: alta velocidad (arts. 77 inc. n, 48 inc. j, 51 inc. e), conducción bajo los efectos del alcohol (art. 48 inc. a, art. 77 inc. m), violación a la velocidad precautoria considerando las condiciones del conductor (art. 50); no tenía el pleno dominio de su vehículo teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito y por eso no pudo reaccionar a tiempo (art. 39 inc. b, según el perito médico no estaba en condiciones de advertir las circunstancias del tránsito).

Al demandado no se le acreditó ninguna violación a la norma de tránsito. Se invocó una presunta prioridad de paso que, como demostramos, no existía.

Entonces, el actor cometió todas las infracciones de tránsito relacionadas con la causa del accidente y pesa sobre él la presunción de responsabilidad del art. 64 de ley 24.449. Esta presunción elimina la responsabilidad objetiva del art. 1769 CCCN

Sin embargo, en la sentencia no se hace mención de esta presunción, lo cual es una violación al principio de jerarquía normativas establecida en el art. 31 CN.

En efecto, el art. 70 inc. b de la ley 24.449 y el art. 1709 CCCN establecen que en materia de responsabilidad se deben aplicar las normas de tránsito con preferencia a cualquier otro cuerpo normativo, lo cual incluye al CCCN.

Como si todo lo dicho fuera poco el perito Lic. Juan José Cata dice que “...el conductor de la motocicleta marca Honda hubiera tenido la posibilidad de evitar la colisión si el mismo circulaba a velocidad precaucional considerando el cruce peligroso y de haberse encontrado en estado psico-físico normal (sobrio), puesto de que tenía tiempo y espacio suficiente para advertir un punto de peligro en su trayectoria y reaccionar mediante una acción evasiva efectiva”.

Esta conclusión también hecha por tierra la prioridad de paso invocada en la sentencia y confirma que la producción y la posibilidad de evitar el accidente recaían en el actor.

Nos encontramos ante un caso de culpa exclusiva de la víctima, por la cual mi mandante no debe responder, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1111 del Código Civil (vigente al momento del hecho), según el cual *“El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”* y por la exclusión de responsabilidad objetiva previsto en el art. 1113 del mismo cuerpo normativo.

La Doctrina Legal de nuestra Corte Suprema indica que: *“La culpa exclusiva de la víctima, descripta en la instancia de mérito, determina el rechazo de la acción resarcitoria, por ser su conducta la única causa relevante y adecuada del daño, que excluye todo otro factor de atribución de responsabilidad civil”* (CSJ Sala Civil y Penal. Sentencia N°: 578 Fecha: 23/07/2002).

La sentencia también omite aplicar al caso la presunción jurisprudencial del vehículo embistente. La motocicleta impactó con su frente el costado del automóvil, lo cual se encuentra sobradamente acreditado. Cabe recordar que el Sr. Sosa también conducía una cosa riesgosa y le resulta igualmente aplicable la responsabilidad objetiva de los arts. 1769 y 1757 CCCN (ex art. 1113 CC).

El Sr. Juez de primera instancia tampoco aplica sobre el actor una presunción o una reversión de la carga probatoria fundada en su estado de alcoholemia y de imposibilidad de reacción determinada por el perito médico. Si no estaba en condiciones de reaccionar, el sentido común indica que él tuvo la culpa del accidente y el actor tendrá que producir prueba en contrario y no lo hizo.

La sentencia recurrida también se opone al orden e interés público involucrado en los casos de alcoholemia positiva en los conductores. Es sabido que la provincia, y la mayoría de las jurisdicciones del país, han sancionado normas de alcoholemia 0. Estas restricciones tienen como finalidad el resguardo del orden y la seguridad pública. La tolerancia 0 de las leyes debe verse reflejada en los fallos judiciales.

Una sentencia que minimiza la importancia de la alcoholemia, aún con un informe médico que detalla todas las limitaciones que tenía ese conductor alcoholizado, está violando el orden público. Además de enviar un mensaje a los conductores: no importa si están alcoholizados y su conducta es la causa del accidente, vengan a los tribunales que igual recibirán una indemnización.

En definitiva, el criterio de la sentencia consagra la inmunidad del conductor alcoholizado con fundamento en una responsabilidad objetiva del demandado de la cual le es imposible desligarse.

La sentencia tampoco resulta equitativa al mantener una responsabilidad ficta por encima de una responsabilidad real demostrada con pericias. La sentencia premia al que ha violado todas las normas de tránsito y castiga a quien ha obrado de acuerdo a la normativa.

Por todo lo expuesto, solicito se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se resuelva rechazar la demanda con fundamento en la culpa exclusiva del Sr. Julio Benjamín Sosa o, en su defecto, reasignar los porcentajes de responsabilidad de forma tal que contemple la cantidad y gravedad de violaciones a las normas de tránsito cometidas por el actor y que fueran debidamente acreditadas.

3) Tercer agravio.

Correspondiendo el rechazo de la demanda, también nos agravia los rubros concedidos al actor y su cuantificación.

El actor no ha acreditado los hechos sobre los que funda sus pretensiones indemnizatorias por los rubros lucro cesante (no acreditó actividad, ingresos, ni frustración efectiva) ni tampoco la existencia de un daño psicológico de una entidad suficiente como para diferenciarlo de las afecciones que invoca para reclamar el daño moral.

La sentencia releva de toda prueba al actor, lo cual es una violación al art. 302 CPCC ley 6176 y al 322 CPCC supliendo la negligencia de la parte, lo cual también le está prohibido al Juez.

Además, aplica retroactivamente las normas del CCCN a pesar de que, al hacer el encuadre legal, estableció que se debe aplicar el Cód. Civil vigente al momento del hecho. Esto es una violación al art. 7 CCCN y al art. 18 CN.

Con respecto a los supuestos gastos médicos, de farmacia, etc. el actor no ha producido ninguna prueba, no ha invocado impedimento alguno y, al ser atendido en un hospital público donde la atención es gratuita, los gastos no pueden presumirse.

Así lo establece la doctrina legal de nuestra Corte, violada por el fallo recurrido.

“A diferencia de lo manifestado por los actores, tal como consideró correctamente el tribunal sentenciante, se debe inferir que “en un hospital público...la atención es gratuita”. Ello es así de acuerdo al art. 125 de la Constitución de Tucumán de 1990 (vigente a la época en que ocurrió el accidente que dio origen a esta demanda) conforme al cual, “la Provincia procurará las medidas y recursos legítimos, eficaces, eficientes, viables y conducentes en el más alto grado posible, al mantenimiento, restauración y promoción de la salud física y espiritual de todos, respetando su dignidad y los derechos de ella provenientes”. Asimismo, el art. 2 de la Ley N° 5652 (tanto en su redacción originaria como en la redacción posterior establecida mediante Ley N° 7466) reconocía que “la salud es un derecho básico e inalienable del hombre. El Estado Provincial garantizará el ejercicio pleno de ese derecho, brindando asistencia médica integral, a todos los habitantes del territorio de su jurisdicción que la requieran y necesiten, a través del tiempo y sin ningún tipo de discriminación. A tales fines es responsable y garante económico de la organización, planificación y dirección de un sistema igualitario, de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud física y mental de la población y de cualquier otra prestación o servicio de salud”.

En la época que ocurrió el accidente, la gratuidad del sistema público de atención de la salud de los habitantes de nuestra provincia ha sido contemplada como una obligación constitucional asumida por el Estado Provincial como consecuencia de la indeclinable responsabilidad que le cabe como garante del sistema de salud pública, lo que fue ratificado por la reforma constitucional de 2006 que en su art. 146

establece que “el Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona”, al compeler a la Provincia a asumir “su obligación ineludible” de “garantizar el derecho a la salud integral pública y gratuita de todos sus habitantes, sin distinción alguna”, al determinar que “todas las personas tienen derecho a recibir atención médica en los hospitales y establecimientos públicos de salud” y al considerar que “el medicamento es un bien social básico, siendo obligación del Estado arbitrar los mecanismos que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de la Provincia”.

No habiéndose producido en las concretas circunstancias de esta causa ninguna prueba fehaciente que desvirtúe la interpretación de la Cámara acerca de la gratuidad de la atención hospitalaria, no luce justificada a este respecto la tacha de arbitrariedad formulada por la parte recurrente”. (CSJT, ROMANO DE BUSTOS MARIA ELENA C/MUNICIPALIDAD JUAN BAUTISTA ALBERDI Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS, sentencia de fecha 26/03/2012).

El monto concedido por este rubro tampoco está fundado. El fallo reconoce que en la demanda se reclama la suma de \$5.000, que no hay pruebas sobre ellos, que se presumirán (en contradicción a la doctrina legal citada) y los establece en \$120.000 sin ningún fundamento. Por lo tanto, la determinación resulta arbitraria al carecer de todo argumento.

Por lo expuesto, solicito se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y se revoque la sentencia.

4) Cuarto agravio.

Sin perjuicio de lo dicho en los agravios anteriores, atendiendo al principio de eventualidad procesal, nos vemos obligados de agraviarnos de la tasa de interés aplicada por el fallo a pesar de que, a nuestro criterio, ninguna indemnización sea procedente.

La sentencia nos agravia en cuanto manda pagar intereses según tasa pasiva del BCRA desde la fecha del hecho y hasta la sentencia, a pesar de que la sentencia ha fijado valores actualizados de las indemnizaciones.

Es sabido que tanto la tasa de interés pasiva como la activa contienen un componente inflacionario. Al haberse establecido valores actuales, el capital no se encuentra depreciado por la inflación del pasado, en consecuencia, otorgar ese componente inflacionario implica un enriquecimiento sin causa para el actor.

Es por ello que, los fallos que fijan indemnizaciones a valores actuales establecen una tasa de interés pura que ronda entre el 4 y 8% anual. Así es el criterio unánime de la jurisprudencia y del cual el fallo se ha apartado.

Por otra parte, esa indexación del capital por el componente inflacionario que contiene la tasa de interés pasiva es una violación a la prohibición de indexar contenida en la todavía vigente ley 23.928.

Por lo expuesto, corresponde revocar la sentencia y aplicar una tasa de interés pura.

5) Quinto agravio.

También nos agravia la imposición de costas. Correspondiendo el rechazo total de la demanda, la imposición total de las costas debía hacerse al actor.

En el peor de los casos, se debe reasignar los porcentajes de responsabilidad en la producción del hecho y, con ello, la de imposición de costas.

Sin perjuicio de ello, el rechazo del rubro lucro cesante implica un vencimiento para esta parte que debe verse reflejado en la imposición de costas. El monto histórico reclamado por este concepto significa un 23,45% del monto de la demanda. Resultando una victoria significativa para esta parte que debe verse reflejada en la imposición de costas.

Por lo expuesto solicito se haga lugar al agravio y se revoque la imposición de costas.

III. PETITORIO.

Por lo expuesto solicito:

1) Se tenga por presentado en tiempo y forma el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25/06/2024 y de su aclaratoria de fecha 30/07/2024.

2) Se corra traslado a la actora del recurso presentado.

3) Oportunamente se eleve a la Excma. Cámara de Apelaciones.

A la Excma. Cámara de Apelaciones pido que:

1) Se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con expresa imposición de costas en caso de oposición.

Provea de conformidad,

JUSTICIA

